

El nuevo autoritarismo burocrático y el sindicalismo peronista. Análisis de la “participación” junto al gobierno militar de Onganía en la Argentina de los años sesenta: del “nuevo orden social” al “Cordobazo”

Darío Dawyd

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LABORALES
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

ABSTRACT

In the present work we reconstruct the relationship between the Peronist unionism and the new authoritarianism of 1966. We seek to analyze the general discussion concerning the union participation with authoritarian governments, and the debate within the Peronism around that relation with the military government. To do that, we focus on the development of the union group called “participacionista”, which answered positively the call of the military government. We aim to contribute to the study of the “new authoritarianism”, based on his alliance with the “participacionista” union sector, and to understand its place in the Argentine union tradition.

Keywords: new authoritarianism; Revolución Argentina; Onganía; participacionism; unionism

En el presente trabajo buscamos reconstruir la relación del nuevo gobierno militar de 1966 con el sindicalismo peronista. A partir de aquella relación, buscamos indagar en la discusión general en torno a la participación sindical con gobiernos autoritarios, y el debate particular al interior del peronismo en torno de aquella relación con los militares. Para ello nos centramos en la trayectoria del grupo sindical “participacionista”, que respondió positivamente al llamado a acercarse al gobierno militar, y buscamos aportar al estudio del “nuevo autoritarismo” a partir de su alianza con sectores sociales, específicamente el estudio de aquella tendencia sindical poco analizada.

Palabras claves: Nuevos Autoritarismos; Revolución Argentina; Onganía; participacionismo; sindicalismo

Introducción

En el presente trabajo buscamos reconstruir la relación del sindicalismo peronista con el nuevo gobierno militar de 1966, haciendo énfasis en la trayectoria formativa del sector sindical que se conoció como “participacionista”¹. La discusión en torno a la “participación” es relevante en varios aspectos; por un lado, está enmarcada en el debate general sobre la participación de las corporaciones en el Estado; de manera particular (en la época de nuestra investigación) está relacionada a la vinculación con los nuevos gobiernos autoritarios; de manera específica está ligada a la relación entre aquella vinculación y la tradición del sindicalismo peronista, que tanto prestaba elementos a quienes argumentaban a favor de aquella participación, como a quienes sostenían que el peronismo verdadero debía oponerse a aquellos gobiernos autoritarios.

En virtud de estos aspectos buscaremos indagar las visiones que desde posiciones antagónicas del peronismo de los años sesenta se tuvieron acerca de la relación entre los sindicatos y el gobierno militar, enmarcadas en disputas que esas mismas posiciones mantenían entre sí por la definición de lo “verdaderamente” peronista. A partir de aquellos debates podremos arribar al aspecto más general de la discusión en torno a la participación en el Estado, específicamente con gobiernos autoritarios.

El período general de nuestro análisis son los años sesenta, específicamente los años de gobierno militar de Juan Carlos Onganía (1966-1970); comenzamos en el momento inicial a partir del cual se planteó la participación sindical, junto a un gobierno militar que buscaba implantar un “nuevo orden” en la sociedad argentina (1966); posteriormente analizaremos como aquel planteo llevó a la ruptura de la Confederación General del Trabajo (CGT) en 1968 (que generó la formación de la CGT de los Argentinos y la CGT de los sectores dialoguistas, quedando el participacionismo al margen de ambas)²; finalmente llegaremos al Cordobazo (1969) y la reunificación sindical en el contexto mismo de la deposición del propio Onganía (1970).

Con la reconstrucción de la relación del nuevo autoritarismo y el sindicalismo, buscaremos aportar al estudio de la política del gobierno militar en pos de lograr una nueva hegemonía social duradera, a través del disciplinamiento de los sectores sociales, así como a partir del estudio de la tendencia sindical que aceptó el disciplinamiento (poco analizada en comparación con los sectores combativos y dialoguistas), y el análisis de caso de Juan José Taccone y la participación del sindicato de electricistas Luz y Fuerza, buscaremos aportar al estudio de la identidad participacionista, su apogeo y crisis, para comprender su lugar en la tradición sindical argentina, en el contexto no sólo del gobierno militar de Onganía, sino en el largo plazo, en los

¹ Este texto proviene, con modificaciones, de mi tesis doctoral en Ciencias Sociales “Sindicatos y política en Argentina, 1968-1970. División, fractura y unidad en el peronismo”, aprobada en marzo de 2011 en la Universidad de Buenos Aires.

² La Confederación General del Trabajo es una central sindical nacional fundada en Argentina en 1930, como colofón de la unidad de los sectores socialistas, comunistas y sindicalistas, que durante los gobiernos peronistas de 1943-1955, fue reconocida legalmente como única central sindical (Dawyd, 2011).

años sesenta y setentas³.

Para la realización de esta investigación fueron relevadas, junto a la bibliografía académica que trata la temática, las fuentes periódicas de la época, las que permitieron recuperar el contexto de la relación militares-participacionistas; entre ellas, privilegiamos el uso del semanario *Primera Plana* y los diarios *La Razón* y *Clarín*, que trabajamos junto con otras fuentes primarias de relevancia como *Confirmado* y *Periscopio*, así como los informes mensuales del boletín de *Documentación e Información Laboral (DIL)*.

Para comenzar, antes de señalar el contexto político de implantación de los nuevos autoritarismos, podemos señalar la presencia de la “participación” en algunos de los estudios más reconocidos. En primer lugar, aquellos que de manera general la adscriben a “formas de participación de la clase obrera en un movimiento nacional popular”, es decir, la vinculación entre clase obrera y partidos o movimientos políticos (Murmis y Portantiero, 2006, p. 179). Retomado desde allí, el debate en torno a la participación no data de la década del sesenta, sino que refiere de manera general a la toma de posición del movimiento obrero respecto de cualquier gobierno (Valenzuela, 1983). De esta manera, los primeros participacionistas habrían sido los mismos obreros que se acercaron al gobierno militar de la década del cuarenta, de donde posteriormente surge el peronismo. Para otros, la existencia de la tendencia participacionista data de los primeros años de la proscripción al peronismo, después del golpe de Estado de 1955 (Cavarozzi, 1984 y McGuire, 2004).

Sin embargo, hay varios elementos que diferencian a los participacionistas de finales de la década del sesenta con los anteriores: la identidad peronista y experiencia de la proscripción, la represión y 10 años de relaciones cambiantes con diferentes gobiernos semidemocráticos; la novedad del gobierno militar de 1966 que los llamó a participar, al tiempo que aplicaba políticas liberales en economía, y era el mismo gobierno que había terminado la indefinición política que durante 1955-1966 permitió que muchos sindicalistas desarrollaran sus dotes negociadoras. En última instancia, los mismos participacionistas consagraron su novedad, al autotitularse “Nueva Corriente de Opinión” (NCO) a comienzos de 1969, después de haber llevado sobre sí las más variadas denominaciones: ex vanderistas, vanderistas blandos, vanderistas en las sombras, vanderismo o sus adyacencias, peronismo oficialista, línea acuerdista, peronismo que pacta, colaboracionismo⁴.

De esto se desprende que el sindicalismo que se conoce como *participacionista*, aquel que adhirió al llamado a la participación del gobierno de Onganía, a partir de la segunda mitad de 1966, fue una escisión del “vanderismo”. El vanderismo, grupo liderado por el dirigente metalúrgico Augusto Vandor, fue la corriente hegemónica dentro del sindicalismo argentino posterior al golpe de Estado contra Perón en 1955, tuvo su momento de apogeo durante los primeros años sesenta, precisamente hasta el nuevo golpe de Estado de 1966. El nuevo contexto de aquella dictadura militar, con su discurso del orden social (de la prohibición de los partidos políticos a los controles en espacios culturales) y otro de la normalización económica (de la estabilización económica a la racionalización del Estado), hizo colapsar la estrategia que el

³ Entre las pocas obras que trabajan el sindicalismo durante el onganato cabe citar a Rotondaro (1971), Fernández (1986), Lobato (1986), Cordone (1993), Brennan (1996) y James (1999).

⁴ Estas denominaciones figuran en los diversos medios periodísticos consultados en el período 1966-1973.

vandorismo había empleado con relativo éxito en los primeros sesenta. Su estrategia de golpear y negociar, endurecerse y participar, adquirió no la característica que supo llevar a aquella tendencia sindical a la primera plana de la política durante la era semidemocrática, sino que durante el nuevo contexto de una dictadura, se asemejó a una indefinición de la estrategia política, que llevó al repliegue de la que había sido la tendencia sindical más importante hasta entonces. Junto a ese colapso, muchos vandoristas comenzaron a proponer actuar sindicalmente sin interferencias políticas y habían dejado de reclamar la vuelta de Perón, las medidas económicas del peronismo y la soberanía popular. De esta manera se fue conformando el sector participacionista, dejando de lado demandas que habían sido tradicionales al peronismo forjado en las luchas de la Resistencia en las que combativos, dialoguistas y participacionistas habían coincidido, antes de que las diferencias los llevaran a formar tendencias separadas.

Aquella tendencia participacionista, salida del núcleo hegemónico dialoguista, o negociadora o “vandorista” según el apellido de su líder más destacado, configuró una escisión cuya importancia estuvo dada porque representó la primera oportunidad en que un sector del peronismo se decidió a abandonar abiertamente una premisa compartida por todo el peronismo desde 1955 (la vuelta de Perón al gobierno), en pos de la participación en un gobierno que reconociera a los sindicatos (y a sus obras sociales y las favoreciera) y permitiera colaborar con él, junto a otras corporaciones, sin importar el origen de ese gobierno, ni su programa económico. La aclaración es válida en tanto el último punto los diferenciaba del vandorismo, que también entendía que los sindicatos debían institucionalizarse (no como grupo de presión, sino como “factor de poder”) pero no acercándose a cualquier gobierno, sino a uno que impulse el desarrollo económico nacional⁵. El sector de los “duros” o “combativos” del peronismo, en tanto, no postulaban el acercamiento con ningún gobierno ilegítimo y continuaba con su propuesta de elecciones realmente libres (que implicaban la participación de Perón, es decir, su vuelta) y un programa económico nacional⁶.

⁵ Entre otras aclaraciones, cabe consignar que el hecho de que el vandorismo pasara a estar a favor de la institucionalización en gobiernos ilegítimos, respondió en parte a que su estrategia electoral (victoriosa en las elecciones que disputó entre 1962 hasta la de Jujuy en enero de 1966) había sido truncada en parte por Perón (en Mendoza, en marzo de 1966) y en parte por militares temerosos de su triunfo en las elecciones de 1967.

⁶ Para encontrar estas tres diversas posiciones sindicales en un texto de la época véase, entre otros, la entrevista a tres representantes de cada una de las tendencias, Juan José Taccone, Augusto Vandor y Lorenzo Pepe, respectivamente (*Confirmado*, 1967, p. 24-27). Cabe resumir las tres posiciones en que el participacionismo privilegiaba la supervivencia del sindicato para concertar con el Estado, al tiempo que olvidaba la demanda por democracia política (que implicaba el retorno de Perón) en pos del estrechamiento de vínculos corporativos. La tendencia dialoguista enfatizó también la preservación de la existencia de los sindicatos y sus funciones de concertación social, pero en el marco de la extensión de la participación política de los trabajadores y la reformulación de un pacto social lo más cercano posible a la década peronista. Los combativos adherían a la demanda en defensa de las organizaciones sindicales y los convenios pero privilegiaban la defensa de las tradicionales conquistas laborales del peronismo, una gran participación del Estado en la economía nacional y de los trabajadores en la política sin proscripciones. Cabe agregar que otras organizaciones sindicales (Independientes, No Alineados) no enroladas en el peronismo también se debatían, de manera general, entre esas tres opciones: participación, negociación, combate al gobierno militar.

Argentina en América y en el mundo de los sesenta

Durante los años sesenta América Latina vivió una de las etapas político-sociales más agitadas. El marco de la guerra fría, por el cual la región había quedado del lado estadounidense en el reparto del mundo, había sido roto con la Revolución Cubana, que modificó un escenario controlado por Estados Unidos a través de tratados, que parecían no requerir de su intervención militar directa (Hobsbawm, 2001). El papel rector de los Estados Unidos en la región se había ido consolidando durante la segunda guerra, y para el final de la misma (a expensas de Argentina, país que más se opuso a tal consolidación) se creó una “región americana”, institucionalizada con la creación de la OEA en 1948, organismo con el que Estados Unidos enfrentó “las consecuencias de la entrada del área americana dentro de la guerra fría”, mediante la crucial modificación del principio de no intervención (Halperín Donghi, 1983, p. 369-377). A excepción de Santo Domingo, la intervención militar directa estadounidense en el continente, no se extendió, en parte porque aquel país orientaba aquellos recursos en otro frente que lo ocupó suficientemente: Vietnam.

El temor a una expansión del castrismo tuvo sus consecuencias, ya que “los Estados Unidos modificaron sus conceptos estratégicos” y “las fuerzas armadas del continente se prepararon para la guerra contrarrevolucionaria. La seguridad nacional sustituyó a la defensa nacional” (Rouquié y Suffern, p. 1997: 291).

Formada bajo influencias estadounidenses, francesas y alemanas, la doctrina de seguridad nacional planteó la existencia de enemigos externos e internos, contra los que debía luchar en el frente militar, pero también en el político, económico y psicológico, lo cual dificultaba acotar al enemigo y favorecía el aumento de la represión y la inteligencia para combatirlo, ampliando el ámbito de intervención de los militares en la política y sociedad, porque la invasión era vista en todo el cuerpo nacional (universidades, partidos políticos, los mismos gobiernos, los sindicatos, las instituciones religiosas)⁷.

En este marco el golpe de 1964 en Brasil, y el de 1966 en Argentina, señalaron una nueva etapa, caracterizada por la intervención directa de las Fuerzas Armadas como institución, en pos de la modernización de las economías nacionales con entrada de capitales externos, cuya garantía contra toda forma de oposición popular, era garantizada por los propios militares (Collier, 1985)

El surgimiento de los regímenes burocráticos-autoritarios fue analizado, para nuestro continente, como producto de una serie de factores económicos (la profundización de la industrialización), políticos (la existencia de una versión de democracia política con exclusión del sector popular) e ideológicos (el mencionado temor a la revolución cubana), según la clásica caracterización de

⁷ Aquella doctrina se caracterizada por “la concepción totalizante de la sociedad, y en consecuencia, de la defensa de ella, tanto a nivel de sus contradicciones internas como externas, las cuales se reflejan en todos los campos o instancias, lo cual implica que la defensa de una nación no depende exclusivamente del presupuesto militar, de la cantidad de tropa y armas, sino de su potencial económico, de sus valores e ideología y de la solidez de sus estructuras políticas y sociales” (Nina, 1979, p. 37).

Guillermo O'Donnell⁸.

En aquella caracterización de O'Donnell la explicación de estos regímenes no democráticos, en países con centros modernizados, debe buscarse en varios factores previos: activación o no del "sector popular urbano", su exclusión o inclusión (mediante la satisfacción de sus demandas), búsqueda de profundización de la industrialización (tras el agotamiento de la primera etapa, durante la expansión populista⁹) a través de grandes inversiones (que traen por otro lado problemas de inflación, crisis de balanza de pagos, expectativas de consumo y consiguientemente "planes de estabilización"), en el contexto de los efectos de la Revolución Cubana y los esfuerzos estadounidenses por evitar su expansión (lucha antisubversiva, redefinición de la defensa y pertinencia de las Fuerzas Armadas en el desarrollo del país). Así, estos regímenes tenderán a eliminar las demandas consideradas excesivas en función del contexto social, mediante la eliminación de los partidos políticos y las elecciones, la domesticación de sindicatos mediante coerción de sus miembros y cooptación de dirigentes, el encapsulamiento de sectores sociales cuya existencia dependa del gobierno, con vistas a hacer posible la transformación de la economía.

El golpe militar de junio de 1966, que instaló al nuevo gobierno autoproclamado "Revolución Argentina", fue la primera muestra local de un régimen burocrático-autoritario, y la segunda en América Latina, después del golpe de 1964 en Brasil. Entre las novedades impuestas por la Revolución Argentina debe resaltarse la búsqueda de una clausura de la inestabilidad política post 1955, a través de la asunción de nuevo papel de las FFAA, no ya como garantes de un orden "semidemocrático", sino como garantes del gobierno (Cavarozzi, 2002). El nuevo gobierno militar clausuró la política para todos los actores que participaban institucionalmente en ella, a través de los decretos de destitución del presidente y el vicepresidente, de los miembros de la Corte Suprema y los gobernadores e intendentes, en tanto el parlamento nacional y las legislaturas provinciales fueron cerradas, los partidos políticos fueron disueltos y sus bienes confiscados, y solo el nuevo presidente, Juan Carlos Onganía, quedó con las atribuciones ejecutivas y legislativas reunidas para sí mismo (Rouquié, 1982). Onganía designó a diversos miembros de grupos católicos, con los que formó los primeros elencos ministeriales (Selser, 1986), pero tras los magros resultados de los meses inaugurales, los sectores liberales que acompañaron tempranamente a la Revolución Argentina y se quejaban del rumbo nacionalista inicial, accedieron a las áreas económicas del

⁸ Para aquella caracterización véase O'Donnell, 1972. Si el temor a la expansión del comunismo, no dejaba dudas en la mayoría de los análisis (como un factor determinante en la expansión de la doctrina de seguridad nacional, en las sucesiones de golpes, en el aumento de la represión), el factor económico en el surgimiento de los regímenes burocráticos-autoritarios si fue objeto de mayores críticas y largo debate; cabe recomendar para analizar aquel debate los artículos de Albert Hirschman, José Serra y Robert Kaufman en Collier (1985) y la Introducción del propio Collier a aquella obra donde realiza un análisis de los "nuevos autoritarismos" tanto a nivel conceptual como histórico.

⁹ La primera etapa de industrialización, en Argentina y también en América Latina, tuvo que ver con la sustitución de importaciones, imposibles de adquirir en el contexto de crisis mundial tras el crack de 1929. Así, comenzó un proceso conocido como industrialización por sustitución de importaciones (ISI), enfocado principalmente en industrias livianas, en el contexto mismo de la emergencia de gobiernos populistas, favorecedores de aquél crecimiento industrial y la expansión del mercado interno, que encontró limitaciones en la década de 1950, al buscar realizar el pasaje a la industrialización pesada.

gobierno, mientras que las relaciones exteriores, defensa, bienestar y las culturales, quedaron a cargo de los originales miembros del conservadurismo católico¹⁰.

Con los nacionalistas a cargo de la imposición del orden, necesario para que los liberales lleven a cabo la modernización económica, se consagró lo que O'Donnell llamó Estado Burocrático Autoritario. El nombramiento de Adalberto Krieger Vasena en el ministerio de Economía y Trabajo, a comienzos de 1967, y el plan de estabilización anunciado poco después, y aplicado desde marzo de ese año, buscó la modernización económica del país, sin importar los costos para los sectores de pequeños empresarios, trabajadores, e incluso el consumo al que la clase media se había acostumbrado desde una década atrás. Este proyecto económico, que buscaba el ingreso de los grandes capitales externos, la liquidación de los sectores nacionales improductivos, la rebaja de los costos para la industria, era "interdependiente" con el autoritarismo que buscaban imponer los sectores nacionalistas, y era a la postre, el proyecto fundamental de la Revolución Argentina, tras el cual se ensayaban los justificativos del nuevo gobierno (Rouquié, 1982, p. 275).

Los "tres tiempos" fue la síntesis oficial para anunciar que se dedicarían primero a los problemas de orden económico, solucionados los cuales pasarían a atender los sociales, y finalmente, tras la resolución de ambos, la apertura política, a un nuevo orden que imaginaban lejano a los vicios de la política del pasado¹¹.

Uno de los ensayos fundamentales del gobierno militar, fue alrededor del corporativismo¹². El proyecto corporativo buscaba atacar los vicios de la política, que la Revolución Argentina se había llamado a terminar y no era incompatible con el programa económico liberal, junto con el cual daba ejemplo de lo que O'Donnell (1975) llamó corporativismo bifrontal, conformado por elementos estatizantes y privatizantes, en tanto interfería organizaciones de los sectores populares (por ejemplo los sindicatos) para así poder controlarlas, y privatizaba áreas del estado que pasaban a ser ocupadas por grupos de representantes de los sectores dominantes. Si bien la idea no fue implementada (a excepción de una prueba efímera y fallida en la provincia de Córdoba en 1969), en buena medida por la oposición de varios sectores liberales (algunos desde el propio gobierno, sectores de la prensa, y por supuesto los líderes de los disueltos partidos políticos), dejó como contrapartida el encumbramiento del sindicalismo como interlocutor válido del gobierno militar, en tanto era concebido como una de las entidades "naturales" de la sociedad, uno de los

¹⁰ Sobre la reorganización ministerial, véase Rouquié (1982, p. 267-268).

¹¹ Onganía afirmó que la revolución era larga, aunque no podía afirmar la certeza de la cifra de diez años, por lo cual se hablaba de objetivos, no de plazos (*Primera Plana*, N.230, 1967, p. 12). "La suma de nuestro plan político consiste en realizar los objetivos de la Revolución Argentina; así expresado, no se mide en función de plazos ni de elecciones cercanas o lejanas, se mide en realizaciones que el país exige y que todos sabemos que son impostergables" (Onganía en el "Discurso ante las Fuerzas Armadas", 6 de Julio de 1967, en Altamirano, 2001, p. 399-411).

¹² Onganía afirmó que la gestión se basaría en la comunidad, cuya célula está "en lo que al régimen político atañe, en la municipalidad, que debió constituir siempre la piedra angular de la democracia argentina, no de la democracia hueca, sino la que nosotros queremos, rica en contenido, construida de abajo hacia arriba" (Tcach, 2003, p. 50); ello se articularía mediante "'consejos de la comunidad' encargados de canalizar las actividades de las organizaciones sociales y de servir como mecanismos consultivos y asesores de las autoridades" (Cavarozzi, 2002, p. 33).

factores de poder (a diferencia de las entidades artificiales como los partidos políticos, considerados artífices de la inestabilidad argentina).

Los sindicatos como “factores de poder”

En períodos de restricciones electorales, y más a partir de la anulación de la participación político partidaria desde 1966, la actividad política era canalizada a través de los “factores de poder”, actores sociopolíticos relevantes que iban desde las Fuerzas Armadas a la Iglesia, pasando por los grupos empresariales y sindicales (Halperín Donghi, 2006, p. 43).

Tras el golpe de Estado de 1966 y la posterior ilegalización de los partidos políticos y el cierre del Congreso Nacional, los dirigentes sindicales creyeron que no podrían hacerlo con la CGT; acertaron, porque a la central obrera el gobierno militar solo envió veedores para corroborar los números de afiliados con vistas al futuro Congreso normalizador, convocado tras la ruptura de comienzos de año en las 62 Organizaciones (dividida en “62 de Pie junto a Perón” –de los sectores antivandoristas, que seguían las directivas de Juan Perón-, y las “62 Leales a Perón” –del vandorismo que buscaba posiciones autónomas al líder exiliado en Madrid-), que había impactado fuertemente en la central sindical¹³.

Aquellos mismos dirigentes se mostraron conformes de que se terminara el gobierno de partidos y se lo reemplazara por “una administración compartida entre las fuerzas reales (obreros, empresarios, técnicos y militares) en un sistema de equilibrio”; si el plan se truncaba, y el gobierno no consideraba a los sindicatos como aliados, ellos harían una alianza con otro sector de las FFAA y pasarían a la oposición¹⁴.

A partir de la asunción de Onganía, a algunos sindicalistas (y otros tantos militantes, generalmente las juventudes peronistas y de izquierda) se les hizo evidente que el sistema político había desnudado su autoritarismo, y con ello la resolución violenta del mismo encontraba un mejor contexto para desarrollarse. Otros (sindicalistas del sector “Independiente”, muchos de ellos radicales y socialistas) pensaron que la lucha debía encaminarse en pos de la restauración del régimen democrático; otros (peronistas duros) creyeron que no había que restaurarse la democracia que consagró a Illía, sino que se permita la real expresión popular a través del voto sin proscripciones. Ninguno de estos actores modificaron en grande sus aspiraciones políticas tras el golpe. El cambio

¹³ Las 62 Organizaciones Peronistas fue el nucleamiento sindical formado en 1957, cuando en el Congreso normalizador convocado para elegir nuevas autoridades, tras la intervención militar en la CGT (dictaminada por la Revolución Libertadora en 1955), se retiraron del Congreso 32 sindicatos antiperonistas (socialistas, radicales y otras tendencias) que formaron los 32 Gremios Democráticos, mientras que los restantes 62 gremios (integrados mayormente por peronistas, y en una primera etapa también por comunistas), formaron las 62 Organizaciones, que poco después quedó sólo para los peronistas, en tanto los comunistas integraron el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS). Durante los años sesenta los sindicatos peronistas se nuclearon en las 62 Organizaciones, los comunistas en el MUCS, los socialistas, radicales y otros formaron los Gremios Independientes (GI) al tiempo que en los 32 sólo quedaron los pocos férreos antiperonistas. A mediados de los sesenta se formaron los No Alineados (NA), nucleamiento del que se decía que había sido creado desde el vandorismo para restar peso a Independientes y las 62 de Pie (*Primera Plana*, N.200, 1966, p. 13).

¹⁴ Esas fueron las especulaciones del vandorismo durante las primeras semanas en que la Revolución Argentina no mostró cuál camino iría a seguir (*Primera Plana*, N.184, 1966, p. 15).

se produjo al interior de otro grupo que recibió al golpe con inocultables simpatías.

El vandorismo (las 62 Organizaciones Leales a Perón, con gran presencia el día de asunción de Onganía) no propició ninguna de las tres opciones opositoras al nuevo gobierno, sino más bien ensayó una nueva: oír los llamados gubernamentales a la participación y tender puentes en ese sentido¹⁵. Es conocida la euforia sindical por el golpe contra Illía. Un comunicado de la CGT y adhesiones de sindicatos particulares al mismo lo confirman¹⁶. Francisco Prado (Luz y Fuerza), secretario general de la CGT, afirmó que venían esperando un gobierno los interprete, ya que ellos tenían “ansias de colaborar” (*Primera Plana*, N.184, 1966, p. 15 y *Clarín*, 1966a, p. 9).

Esta euforia inicial, que se correspondía con el “desensillar hasta que aclare” decretado por Perón (a la espera de conocer las primeras decisiones del gobierno militar), chocó pronto con medidas que mostraron rápidamente que los términos del acercamiento de los sindicatos al gobierno no iban a ser tan cordiales. Al primer descontento producido por las declaraciones del nuevo embajador en Estados Unidos, Álvaro Alsogaray, emparentando al peronismo con el nazismo y el fascismo, le siguió la presión que puso Vandor en el nuevo convenio metalúrgico¹⁷ y las protestas del vandorista Elpidio Torres, de los trabajadores mecánicos cordobeses, contra despidos en Industrias Kaiser¹⁸. La

¹⁵ José Alonso, distanciado del vandorismo desde que a comienzos de 1966 encabezó las 62 Organizaciones de Pie junto a Perón, estuvo durante los primeros meses más cercano al nuevo gobierno a través del equipo nacionalista que ocupaba la cartera de Economía. Alonso dirigía por entonces a las 62 de Pie, pero en la misma debía convivir con el sector combativo del peronismo, que era comandado por Amado Olmos. Este sector combativo, a diferencia de Alonso (quien se terminaría yendo de las 62 de Pie y aparecería como vocal de la CGT vandorista en 1968, para después pasar definitivamente al participacionismo) no estuvo a favor del golpe ni del nuevo gobierno. Alonso, en tanto, creyó ver en el nuevo gobierno la posibilidad de realizar el “cambio de estructuras” que al frente de la CGT entre 1963 y 1966 había proclamado, en el sentido de búsqueda de consenso de clases, beneficios privados limitados al bien común, cogestión en las empresas, participación del trabajador en el nivel empresarial, además del señalamiento de que no existían partidos políticos representativos, y por ello era inadmisibles que sean los únicos capaces de expresar la vida política, mientras que los grandes movimientos (la CGT entre otros “grupos representativos” de la sociedad) no tenían ninguna posibilidad de expresión real (James, 1999: 256).

¹⁶ La declaración de la CGT hacía referencia al régimen depuesto que había llevado a un “estado caótico en lo social, político y económico” y ante el “movimiento militar que el 27 de junio tomó el poder” y que “constituye un hecho nuevo” e “históricamente asume una gran responsabilidad” demandaban que reconstruyeran la unidad nacional y el pleno empleo, tareas para las cuales la CGT “no puede constreñirse al papel de mera espectadora” y “demanda la participación que le corresponde en un verdadero proceso de progreso argentino” (*Clarín*, 1966a, p. 9). Entidades sindicales y sindicatos apoyando este documento de la CGT en *Clarín* (1966b, p. 11).

¹⁷ Vandor aseguró que no firmaría por menos del 40% de aumento salarial, cuando los empresarios solo ofrecían 25%, y finalmente por intervención del ministro de economía, Salimei, se firmó en 30%.

¹⁸ Además de estas medidas, y si bien el gobierno no había definido su rumbo económico, su política cultural y educativa fue rápidamente puesta en marcha, en aquellos primeros seis meses de gobierno. El clima era definitivamente otro. Las nuevas autoridades de la municipalidad porteña eran sindicadas como responsables del fin de la noche porteña y el comienzo de medidas represivas de la cotidianidad (*Primera Plana*, N.189, 1966, p. 15-19). El gobierno debió enfrentar críticas por la represión a la Universidad, entre ellas de medios estadounidenses porque en la represión (“la noche de los bastones largos”) se agredió a un profesor de ese país, situación que creó tensión entre ambos países durante diez días. La persecución en ámbitos y usos cotidianos, como el acoso policial a quienes usaban pelo largo,

primera medida oficial contra los sindicatos no llegaría, sin embargo, sino con la sanción de la ley 16936 de arbitraje obligatorio, según la cual ante conflictos laborales se debía aceptar el fallo del gobierno, atentando contra los derechos de huelga y las convenciones colectivas de trabajo.

La normalización del sindicalismo entre racionalizaciones económicas y crecidas represivas

En el marco de aquellas primeras medidas que insinuaban futuras disputas entre el gobierno militar y los sindicatos, al interior de estos últimos las propias disputas crecían, tras los ecos de la división del peronismo en las 62 Organizaciones a comienzos de 1966, y que había llegado al seno de la CGT. José Alonso, Secretario General, había sido removido por presión del vandomismo, y la central pasó provisoriamente a manos de Donaires, reemplazado por Prado el 20 de mayo de 1966. Desde aquella fecha la CGT estaba, una vez más, en crisis. Para lograr que volviera a reunir a las tendencias sindicales del país, se convocó un Congreso Normalizador para octubre de 1966, en torno del cual comenzaron a delinearse los agrupamientos sindicales a partir de diferentes posiciones adoptadas frente al nuevo gobierno. También comenzaron a delinearse las posiciones de miembros del gobierno: desde la intervención a la CGT, a voces que hacían un llamado a los sindicalistas a participar para formar una CGT adicta¹⁹.

Al margen de los sectores del gobierno y sus diferentes posiciones respecto de la central obrera, y al margen también de las diferentes posturas obreras frente al gobierno militar, la posición de Juan Perón en torno de la normalización de la CGT demostró que el líder desde el exilio ya había desensillado; antes del Congreso Normalizador declaró: “El que tenga que dirigir a la CGT hará lo que quiera el Gobierno, y las masas lo cuelgan, o hará lo que quieran las masas, y en ese caso lo cuelga el Gobierno” (*Primera Plana*, N.195, 1966, p. 18); ante ello afirmó que la CGT debía ser peronista: “Con una central obrera en nuestro poder, la dictadura está frita. Entonces, por ahora, no hay otra disyuntiva que la central obrera peronista, o no debe haber central obrera posible” (*Primera Plana*, n. 196, 1966, p. 14).

Las 62 de Pie repitieron esa postura y afirmaron que no irían al Congreso normalizador si no se alcanzaba dicho arreglo opositor. Y no se alcanzó. El Congreso de la CGT realizado tras una postergación, el 22 de octubre de 1966, resultó notoriamente vandomista. Participaron todos los núcleos salvo las 62 de Pie, que no estuvieron (por pedido de Perón de no convalidar a Vandom) pero que integraron la nueva CGT para oponérsele al secretariado vandomista que

minifaldas, así como la censura y la persecución contra artistas e intelectuales, desató una especie de “guerra santa” de persecución al que no encajaba en el argentino modelo, una guerra en “la que se destacan los aspectos salientes del microfascismo argentino, el delineamiento de una deshumanización, de la identificación de aquellos elementos sociales que han perdido la categoría de persona y que deben ser eliminados para construir la Ciudad Católica” (Abraham, 1995, p. 46).

¹⁹ El resultado de la indagación de los veedores que el gobierno había enviado a la CGT, para depurar los padrones sindicales antes del Congreso, arrojó los siguientes números: Vandomismo, 220 delegados; Alonsismo, 165; Independientes, 155; No Alineados, 90; MUCS, 10 e Indefinidos, 60. El vandomismo no aceptó estos números de los veedores oficiales y afirmó tener quórum propio, aunque no presentó los informes acreditándolo (*Primera Plana*, N.196, 1966, p. 14).

resultó electo²⁰.

Ante la disyuntiva planteada por Perón, Francisco Prado, el nuevo Secretario General de la CGT, no dudó: que lo cuelguen las masas. En su discurso inaugural del miércoles 26 de octubre, el Secretario General de la CGT manifestó que “Después de muchos años las más altas autoridades nacionales vienen a la casa de los trabajadores. Nos volvemos a encontrar con el país del cual nunca quisimos apartarnos. Deseamos dialogar con el Gobierno con los empresarios, deseamos comprendernos para que el país funcione”. Se refería así a la presencia del nuevo Secretario de Trabajo, Rubens San Sebastián, quien se encargó de hacer llegar el saludo del “Excelentísimo Señor Presidente de la Nación a la clase trabajadora” (*Primera Plana*, n. 201, 1966, p. 18)²¹.

Los opositores a Prado señalaron que las nuevas autoridades sindicales celebraban con quienes intervinieron los gremios de Canillitas y Prensa, sancionaron la ley de arbitraje obligatorio que la misma CGT condenó (también bajo la dirección del mismo Prado), y dejaban morir la huelga de los portuarios que encabezaba Eustaquio Tolosa, a quien intervinieron el sindicato por protestar contra las modificaciones introducidas en el régimen de trabajo portuario²².

A pesar del silencio de la CGT ante estas medidas, las nuevas autoridades de la central sindical se esforzaban en afirmar que ellos no buscaban el apoyo del gobierno, sino el gobierno el de ellos. También afirmaron que si el gobierno definía una política contraria al pueblo, lo enfrentarían reuniendo a todo el pueblo en la CGT (*Primera Plana*, n. 201, 1966, p. 21). Sin embargo no se mostraban complacidos cuando recibían propuestas como la de Antonio Scipione (miembro del nuevo Consejo Directivo) de tratar el tema de los portuarios y ferroviarios (y en el largo plazo de todos los gremios del Estado, que en algún momento se racionalizarían) llamando a un Comité Central Confederal (CCC), donde difícilmente pudiera escapársele al vandorismo una crítica al gobierno, dado que muchos sindicatos de las 62 de Pie podrían forzar un pronunciamiento en ese sentido. Como en la CGT triunfó el pedido de convocatoria al CCC (al tiempo que también en el gobierno triunfó la línea agresiva de Salimei y el secretario Lanusse, contra la conciliadora de San Sebastián) se generó un acercamiento entre el portuario Tolosa, el radical Scipione, gran parte de los obreros del Estado, sindicatos de izquierda y las 62 de Pie. Si ellos triunfaban en el CCC e imponían una salida combativa, Vandor, para no perder la unidad de la CGT, aceptaría esa la decisión, y junto a él, quienes lo acompañaban en la “línea acuerdista” (*Primera Plana*, n. 205, 1966, p. 13).

²⁰ Los cargos se dividieron de la siguiente manera: los ocho del Secretariado Nacional para el vandorismo y los No Alineados (Francisco Prado, peronista que estaba en el grupo de los No Alineados, siguió como Secretario General), el MUCS, circunstancial aliado de Vandor quedó fuera por presión de los Independientes, quedando el Consejo Directivo formado por 5 Independientes, 5 No Alineados y 10 vandoristas.

²¹ Rubens San Sebastián había asumido como Secretario de Trabajo, en lugar de Tamborenea, para regocijo del vandorismo y para sufrimiento del alonsismo que perdía así un funcionario de confianza.

²² Para Perón esta CGT no iba a durar. Al lado de Perón y Alonso, en las 62 de Pie, Amado Olmos iba más allá en sus razonamientos, y afirmaba que la CGT no puede decidir entre enfrentar o no al gobierno, porque de todas formas va a acatarlo y que sólo algo fortuito colocaría a Vandor en la oposición a Onganía para no perder el prestigio sindical (*Primera Plana*, N.201, 1966, p. 21).

Antes del CCC, el viernes 2 de diciembre de 1966 Onganía firmó los decretos de reorganización ferroviaria, y al hacerlo intervino en la cuarta cuestión que había señalado como crítica (las otras eran la Universidad, la economía tucumana y los puertos). Con la política antiferroviaria en marcha y la oposición de los sindicatos del sector, Vandor, para no quedar atrás, propuso en el CCC el llamado a huelga, pero con la salvedad de criticar al equipo económico, no a Onganía. Acordaron un paro para el 14 de diciembre para protestar contra la política económica. Para los combativos era un apoyo a los ferroviarios, mientras que para los negociadores era una presión sobre el gobierno para que volviera a negociar, en la creencia general del vandorismo que sostenía entonces (y lo haría por mucho más tiempo) de que Onganía estaba mal asesorado por su gabinete, y ellos debían dar el toque de alarma²³.

El 14 de diciembre se desarrolló el paro general²⁴. El gobierno en lugar de medidas represivas se dedicó a aclarar por las radios oficiales las penosas consecuencias para el país que traía tal medida y a avisar que las condiciones eran normales para los que querían ir al trabajo²⁵. San Sebastián sostuvo ante Onganía que debían aguantar la huelga y que la misma no significaba romper con los obreros porque la CGT emitió una declaración donde afirmaba que no dejarían el diálogo con el Gobierno. Aquella misma declaración significó para las 62 de Pie, los Independientes y los comunistas una claudicación a lo que el CCC había resuelto 8 días antes²⁶. Estas disidencias irían a aflorar en el CCC siguiente, reunido para analizar la huelga, donde no se acordó entre la propuesta de las 62 de Pie para que se establezca un estado de alerta por el cual el gobierno note todo el tiempo la presencia de la CGT, y la del vandorismo de llevar a cabo acciones encadenadas y que continúen las negociaciones entre San Sebastián y Prado, porque se llevaban muy bien.

Cabe notar así como en torno de aquellas primeras políticas del gobierno militar (desde la legislación laboral a los conflictos en puertos y ferrocarriles) se fueron comenzando a delinear las nuevas tendencias sindicales. Tolosa junto a

²³ "La CGT espera que el Gobierno nacional enmiende su política y enuncie un programa de realizaciones donde el esfuerzo de los argentinos multiplique la riqueza y la devuelva a la comunidad" por lo que "el paro no significa la ruptura del diálogo que se inició con el señor Presidente de la Nación; la alternativa está en manos del Gobierno: si persiste en su alianza con los sectores que se nutren de la dependencia y el atraso se hará inevitable la ruptura y el movimiento obrero luchará hasta sus últimas consecuencias", según la declaración del último CCC (*Primera Plana*, N.207, 1966, p. 21).

²⁴ La huelga del 14 fue la más importante desde la del 7 de junio (defensa de la ley de contrato de trabajo, contra Illía) pero el gobierno también capitalizó algo de ese dejar hacer la huelga sin reprimirla. Según el ministerio del interior en el sector fabril y de transporte hubo ausentismo laboral del 85%, tanto como en mercantiles. Parcialmente pararon los periodistas y gráficos. Lo que destacaron los observadores fue el cumplimiento de la huelga de parte de "gremios de clase media" dispuestos a reclamar ahora mejores salarios (*Primera Plana*, N.208, 1966, p. 17).

²⁵ Antes había intentado, sin éxito, detener o posponer la huelga (el lunes 12 habían hecho la última negociación en ese sentido entre San Sebastián, Francisco Prado, Eleuterio Caldosos y Maximiano Castillo, pero la no conclusión del pleito portuario llevó a que la huelga se mantuviera).

²⁶ La extensa declaración fustigaba con detalle la política económica "liberal" del gobierno que beneficiaba a los "intereses oligárquicos" y "monopolistas", criticaba las políticas del ámbito laboral, universitaria, pero terminaba afirmando que "la declaración del paro de actividades por 24 horas no significa, por parte de la CGT, la ruptura del diálogo que se inició con el presidente de la Nación" pero "la alternativa u opción está en manos del Gobierno" que deberá optar entre "los sectores que se nutren de la dependencia" (y el movimiento obrero lo combatirá) o ponerse del lado de "las grandes soluciones nacionales" (*Clarín*, 1966c, p. 28).

los sectores combativos de las 62 de Pie y los Independientes buscaban una alianza contra el gobierno, mientras el vandorismo buscó permear en sectores del afines gobierno para que los obreros consiguieran su lugar en el nuevo ordenamiento nacional (*Primera Plana*, n. 209, 1966, p. 14). Para enero de 1967, la situación se había esclarecido un tanto más. Los opositores eran las 62 de pie, comunistas e Independientes (viajantes, entre otros sindicatos) y pedían un CCC para que la situación ferroviaria no termine como la portuaria y como Tucumán. Los negociadores eran los vandoristas, otros Independientes (mercantiles, bancarios, personal civil de la nación y gráficos, entre otros) y los No Alineados (*Primera Plana*, n. 213, 1967, p. 18-19 y 23).

Estas posiciones se esclarecerían más a partir de que a comienzos de 1967, el gobierno militar redefinió su rumbo económico. El reemplazo del ministro Salimei por Krieger Vasena, fue un avance de los liberales del gobierno y al plan de racionalizaciones del sector público se le sumaría poco después una serie de medidas de estabilización de la economía con vistas a reducir la inflación y recuperar el crecimiento²⁷.

Antes del anuncio de las mismas el gobierno se dedicó a terminar su pleito con la CGT y preparar el terreno en el cual pudiera imponer tales medidas: al CCC del 3 de febrero donde se resolvió lanzar un combativo Plan de Acción²⁸, el gobierno respondió (a diferencia del paro de diciembre) con quitas de personerías sindicales y un “escalonamiento” de medidas represivas.

Esta nueva posición del gobierno desconcertó a los sindicalistas. Lorenzo Pepe (ferroviarios) y Vandor se mostraron favorables a llevar a cabo todas las fases del Plan de Lucha, pero otros se opusieron, como el frondizista Liberato Fernández (marítimos) que fue apoyado por otros vandoristas como Eleuterio Cardoso (carne), Ángel Peralta (vitivinícola), Rogelio Coria (construcción), Adolfo Cavalli (petroleros) y Jerónimo Izetta (municipales)²⁹. El miércoles 22 de febrero de 1967 le suspendieron la personería (como parte del escalonamiento) a los ferroviarios, y harían lo mismo con metalúrgicos, mecánicos (dos de los sindicatos que más acataron el Plan de Lucha), textiles, electricistas, y azucareros, y si no suspendían el paro del 1° de marzo, intervendrían la CGT. Para este día los sindicatos pidieron calma y las movilizaciones no se cumplieron. El vandorismo sin Vandor se reunió, con asistencia de Castillo, Peralta, Coria, Cavalli, Izetta y Cardoso y estimaron que Onganía se estaba fortaleciendo, y por ello era mejor pactar antes de que destruyeran definitivamente a los sindicatos; para ello solicitaron un nuevo CCC para acordar la retirada. El viernes 24 “fue la jornada más agresiva del dispositivo cegetista” (*Primera Plana*, n. 218, 1967, p. 14) y estallaron incidentes en San Martín y Caseros (en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires) y el paro de

²⁷ Anunciadas en marzo, incluían: devaluación del 40% del peso, disminución de impuestos a la importación, liberalización del mercado de cambios, saneamiento del gasto público, suspensión de convenciones colectivas de trabajo y aumentos del 15% en salarios congelados hasta diciembre de 1968, acuerdos de precios, desgravación para comprar maquinaria industrial y agraria y para inversiones en vivienda, entre otras (O'Donnell, 1982, p. 138-139).

²⁸ Cronograma del “Plan de Acción”: 8 al 17 de febrero: período de agitación; 20 al 24 de febrero: movilización (con paros parciales en todo el país entre las 11 y las 14 horas); 1° de marzo: huelga general de 24 horas; 10 de marzo: concentraciones en Capital e Interior; 21 de marzo: huelga general de 48 horas.

²⁹ Estos afirmaban que los empresarios aceptaban dialogar si se suspendían los paros, y de esta manera se forzaría al gobierno a volver al diálogo, o por lo menos se alejaría al sindicalismo de la ruina a la que lo llevarían los paros, la represión y las intervenciones.

los ferroviarios se cumplió (sin participación de los conductores de ferrocarriles)³⁰.

A la reunión del viernes 24 llegaron dos posiciones: 1) Flexibles: querían suspender el paro (“No alineados”, vandoristas, y algunos independientes). 2) Duros: querían llevar a cabo el paro a toda costa (62 de Pie, comunistas, otros vandoristas y Vandor, de quien se decía que no podía abandonar el Plan de Acción porque defraudaría).

El paro se realizó y el escalonamiento represivo del gobierno contra la CGT continuó con la suspensión de las personerías gremiales a los sindicatos más activos durante el mismo: metalúrgicos, textiles, azucareros, químicos y telefónicos de Capital Federal. El viernes 3 de marzo el Banco Central congeló los fondos de aquellos cinco gremios y las cuentas personales de sus dirigentes, mientras que la Secretaría de Justicia canceló la existencia gremial del sindicato ferroviario, que ya tenía la personería suspendida desde el 22 de febrero (y sus bienes irían a remate). También el viernes se conocieron sanciones a estatales. El sábado, el último escalón del escalonamiento fue la sanción de la ley 17192, que creó el “servicio civil de defensa”, por la cual el gobierno podía movilizar y someter a fuero militar a toda persona mayor de 14 años (*Primera Plana*, n. 219, 1967, p. 14). La CGT no sería intervenida para no dar al exterior una imagen antipopular, y la última etapa del escalonamiento sería la modificación de la ley de asociaciones profesionales por una con “libertad sindical”.

Todas esas medidas se sancionaron para presionar a la próxima reunión del CCC y forzar la postergación de la última etapa del plan de lucha: los paros generales por 48 horas del 21 y 22 de marzo. Entre los dirigentes sindicales mientras unos buscan cambiar la protesta por la búsqueda de alianzas con empresarios, intelectuales y técnicos, otros proponían seguir la lucha. Entre los primeros estaban Prado, Cardoso, Taccone, y otros vandoristas (Cavalli, Coria, Peralta, Negrete), muchos independientes liderados por Armando March, algunos peronistas y el líder de la tendencia era el marítimo Liberato Fernández. La segunda tendencia se preguntaba qué ganaría la CGT levantando las medidas de fuerza ante el ataque del gobierno, porque además el gobierno seguiría aplicando sus políticas y los reclamos de los trabajadores seguirían en pie; en esta actitud estaban líderes disímiles como Vandor, Navasal (alimentación), la “izquierda peronista” de Amado Olmos, De Luca (navales), Alfredo Airas (jaboneros), Alfredo Eyheralde (calzado), los comunistas liderados por Manuel Rodríguez (químicos), los No Alineados como Antonio Scipione y Ángel Correa (sanitario) y los Independientes que seguían a Tomás Uncal. Finalmente, el jueves 9 de marzo, el CCC “arrojó la toalla” de su plan de Acción, sin cumplir la última etapa del mismo, el paro de 48 horas. Este fue el primer triunfo de los participacionistas, tal como se empezaba a denominar a quienes sostenían la primera opción. Para algunos selló la muerte de la CGT porque el gobierno se quedaba sin enemigos, mientras que el participacionismo leyó el hecho como un paso atrás de la CGT para salvar su vida³¹.

³⁰ Asimismo por estos días circulaban las versiones, y eran parte de las consideraciones de cada sector, de que Onganía sería desplazado por un elenco de militares nacionalistas más cercano a las posiciones de los obreros.

³¹ Según el análisis de *Primera Plana*, la CGT tenía dos alternativas: “el descenso a la subversión, a la acción clandestina” manteniendo a los sindicatos como pantalla de atención a lo gremial, o la adhesión a los designios del gobierno y “convertir a la central en una oficina de la administración pública” (*Primera Plana*, N.220, 1967, p. 18).

Tras levantar el paro el sector duro logró que se convocara un nuevo Congreso Nacional de la CGT para que la actual conducción renuncie y se elijan nuevas autoridades. El vandorismo no quería dejar los cargos porque no se sentían culpables del fracaso de un plan de acción que no quisieron (hasta el 3 de febrero eran dialoguistas y conciliadores con el gobierno) pero aceptaron para que no los sobrepase la ola combativa. Las 62 de Pie quería derrocar a Vandor y poner a José Alonso, y los Independientes aceptaron derrocar a Vandor para así mediar y tener más cargos en una elección de autoridades de la CGT³². El CCC se reunió el viernes 14 de abril y formalizó la citación del Congreso para el 29 y 30 de mayo, donde se aceptarían las renunciaciones del actual Consejo Directivo y se elegirían nuevas autoridades.

Sin embargo, aquel Congreso finalmente no se realizó durante 1967³³. Por no cumplir con las disposiciones del 969/66, y a fin de que el gobierno reconociera a sus autoridades, los nucleamientos decidieron elegir una *Comisión Provisoria* (o *Delegada*) de 20 miembros para que esté al frente de la CGT hasta que los sindicatos cumplan tal decreto. La Comisión gobernaría por tres meses, hasta que fueran cubiertos los requisitos legales.

San Sebastián y los participacionistas criticaron la conformación de la Comisión y pidieron la solución estatutaria³⁴; asimismo propusieron que no se criticara al gobierno en la Asamblea de la OIT para no fomentar a las “fuerzas antinacionales” y que se aclarara en Ginebra la caducidad en Argentina de la “democracia condicionada”³⁵. El gobierno, a pesar de que no reconocería a la Comisión, tampoco borraría del mapa a la CGT, y en cambio buscaría colocar, antes del Congreso Normalizador, algún dirigente adicto en reemplazo de Prado (podría ser Taccone), y alrededor suyo a miembros del “equipo ‘conciliador’ que fue creciendo a la sombra del vandorismo o en sus adyacencias (Cardoso, Cavalli, Peralta, Coria, Liberato Fernández)” (*Primera Plana*, N.231, 1967, p. 14) y que quedó (al menos en sus figuras más notables) al margen de la Comisión Delegada.

El lunes 29 de mayo de 1967 Francisco Prado cedió la conducción de la CGT, el jueves 1º de junio se eligieron los nombres de la Comisión para conformar el Secretariado General, y el lunes 5 emitieron un documento crítico contra las políticas económicas de Krieger Vasena y la nueva ley de

³² Mientras peronistas ortodoxos, Independientes y comunistas presionaban para que se convoque a un nuevo Congreso, el vandorismo para quedarse en sus cargos comenzó a buscar el diálogo con el gobierno para ver si le devolvían personerías a los gremios sancionados y así recuperar algo de imagen. Taccone, Prado y Cavalli fueron a ver al ministro del interior Borda, quien dijo que el gobierno no quería dar la imagen de que triunfó sobre la clase obrera (*Primera Plana*, n. 221, 1967, p. 12).

³³ Sería el que durante 1968, y realizado dos veces, consagró a Ongaro y la CGT de los Argentinos y a Vicente Roqué y la CGT Azopardo (vandorista), mientras que los participacionistas se quedaron al margen de ambas.

³⁴ El sindicato de electricistas emitió una declaración el 24 de mayo de 1967 contra la conformación de dicha comisión, aunque no estaba sola: petroleros, construcción, gastronómicos, vitivinícolas y seccionales ferroviarias, se habían alineado “en la posición que ahora se califica peyorativamente como ‘colaboracionista’” (*Clarín*, 1967, p. 22).

³⁵ Sobre el tema de la asamblea de la OIT Prado dijo que las cuestiones nacionales debían resolverse en el país, y al parecer los delegados obreros solo informarían sin abrir juicio de valor sobre las medidas tomadas por Onganía. No sería ni la primera ni última asamblea de la OIT donde se debatirían o alrededor de la cual se negociaría para denunciar o no al gobierno, a la espera de que la asamblea decidiera una moción contra el gobierno de turno y así empeorar su imagen internacional por reprimir a los trabajadores.

hidrocarburos (que permitiría explotaciones a empresas extranjeras).

El gobierno busca la participación: medidas económicas del giro populista antes de la normalización de la CGT

El miércoles 25 de octubre de 1967 San Sebastián sancionó una medida contra sus opositores en el gobierno y en los gremios: un sistema menos rígido para la racionalización en empleados estatales, que permitió a los dirigentes sindicales ocupar cargos en las comisiones que estudiarían la racionalización. Con esto el gobierno buscó empezar a dar forma a la participación, restar gremialistas de sectores estatales a la oposición, y San Sebastián buscó ganar la pulseada al asesor laboral de Krieger Vasena, Tirso Rodríguez Alcobendas, que había propuesto a Onganía la imposición de los nuevos reglamentos a estatales que implicaban cercenar conquistas de los mismos (*Primera Plana*, N.253, 1967, p. 16)³⁶. Con esta medida, y una serie de discursos de funcionarios bastó para que se empezara a hablar de un posible “giro populista” del gobierno. Entre quienes buscaban el acercamiento del gobierno con la CGT, se desarrollaba también una contraofensiva nacionalista (que sustentaba el “giro a lo popular”) contra los liberales del gobierno, y al mismo tiempo de estos encuentros y versiones, se hablaba en todo el país sobre una supuesta avanzada corporativista³⁷.

Aquellas medidas de San Sebastián repercutieron en las reuniones previas al CCC donde se iba a debatir renovar el mandato de la Comisión de los 20 hasta marzo, postergando así el Congreso normalizador de la CGT. Acerca de la renovación de la Comisión y la fecha del Congreso normalizador, se terminaron de definir tres tendencias sindicales, que liderarían los años siguientes del sindicalismo argentino (hasta la aparición de nuevos sectores combativos, clasistas o no, en un marco de radicalización sindical vinculado de distintas maneras a organizaciones revolucionarias). Aquellas tendencias fueron: 1) grandes gremios (metalúrgicos, construcción, textiles, comercio) que buscaban, junto a empresarios de sus ramos, convencer a Onganía de cambiar el rumbo liberal de la economía por otra de pleno empleo y de mayor consumo; 2) sindicatos estatales “participacionistas” (electricistas, petroleros, conductores de trenes, marítimos) que buscaban hacerse de las estructuras participativas de la Secretaría de Trabajo (creían que Krieger Vasena no sería ministro en 1968 y que ello descongelarían los salarios), y que junto a otros participacionistas (vitivinícolas, curtidores, alimentación, y empleados viajantes de comercio, que esperan que su colaboracionismo rinda frutos y aumenten los salarios durante 1968) pretendían retrasar la normalización de la CGT; 3) los opositores al gobierno, pero que no lograban elaborar una estrategia de lucha común, aunque sí coincidían en la pronta normalización de la CGT y su preparación para enfrentar al gobierno.

Cualquier postergación del Congreso favorecía al gobierno porque sin

³⁶ Otras versiones indicaron que no fue San Sebastián, sino Taccone, quien advirtió a Onganía sobre los riesgos de una medida como la de Rodríguez Alcobendas.

³⁷ Dicha avanzada fue capitaneada por visitantes extranjeros (cuatro en total), invitados a dar conferencias sobre corporativismo y nuevas estructuras no liberales. También se recogían opiniones de “ideólogos políticos y sindicales” cercanos al gobierno, sobre el tema en boga del corporativismo: Taccone, Gerardo Ancarola (democristiano disidente), Guillermo Arana (Unión Conservadora de Buenos Aires) y Rogelio Frigerio (*Primera Plana*, N° 248, 1967, p. 12-14).

autoridades de la CGT no se estructuraría ninguna oposición al mismo (*Primera Plana*, N.256, 1967, p. 12 y *Primera Plana*, N.257, 1967, p. 13). Para evitarlo Onganía sumó una serie de anuncios de créditos y gastos públicos, así como la posible vuelta de las convenciones colectivas, que para muchos preanunciaban la “apertura a lo popular”.

El jueves 23 de noviembre el CCC sancionó los términos de un acuerdo entre los líderes de las tendencias sindicales más importantes: 1) prolongar por 120 días el mandato de la Comisión de los 20 (terminaba el 25 de noviembre), 2) citar al Congreso Nacional de la CGT a que elija autoridades el 15, 16 y 17 de marzo de 1968, 3) hacer el 15 de diciembre un acto público de censura a la política económica y 4) refutar las versiones de que hay líderes obreros “complacientes con la Casa Rosada”. La reunión donde se acordó esto, contó con las tres tendencias del momento, “opositores al gobierno, vanderistas y participacionistas” (*Primera Plana*, N.257, 1967, p. 14).

Para los participacionistas la fecha de marzo era ideal porque coincidía con el mes que el gobierno les prometió aumentos salariales y se empezarían a recibir beneficios a tono con la “apertura a lo popular”. El vanderismo comenzó comunicaciones con empresarios para volcar a estos contra la política económica del ala liberal del gobierno, a favor del proteccionismo, contra la eliminación de industrias calificadas de ineficientes y contra la vuelta al “país pastoril”. Frente a estos sectores, los opositores eran minoría y debieron aceptar la continuidad de la Comisión de los 20.

Así como la postergación del Congreso Normalizador, entre los participacionistas y el gobierno planeaban una serie de medidas con las que atraer mayor cantidad de gremios a esta tendencia. Trascendió que devolverían las personerías en metalúrgicos y textiles, con vistas a ganar definitivamente a Vandor y Framini para la causa participacionista (aunque otros afirmaban que si estas elecciones se realizaban con veedores, sepultarían a ambos dirigentes porque ellos enfrentan poderosas oposiciones en sus gremios)³⁸.

Como broche de oro para la conquista de sindicalistas Onganía se preparaba para anunciar medidas que empezarían a pagar el diálogo que muchos le brindaban: prometería antes de Navidad una amplia amnistía a gremialistas que seguían procesados por el Plan de Lucha sindical de 1964, a Tolosa, y a los integrantes del grupo Cóndor (militantes peronistas que habían desviado un avión que dirigieron a las Islas Malvinas para proclamar allí la soberanía nacional) (*Primera Plana*, N.259, 1967, p. 19).

Estos movimientos se coronaron la semana del lunes 18 de diciembre, una de las “más demagógicas que conozca el actual gobierno”, cuando ese día por la noche Onganía, un amante del polo, fue a la cena celebración del club de fútbol Racing, reciente campeón del mundo. Al día siguiente se anunciaron precios máximos para el pan, pollos y huevos y, del lado del presupuesto de 1968, anuncios que contemplaban un aumento del gasto público (*Primera Plana*, N.261, 1967, p. 12)³⁹. Todos estos logros que acumuló San Sebastián se concretarían para muchos, en marzo, cuando los participacionistas formaran un

³⁸ En la Secretaría de Trabajo se trabajaba en las normalizaciones en los sindicatos, porque de ellas surgirían los delegados que definirían a la CGT en marzo como opositora o participacionista.

³⁹ Díaz Colodrero prometía obras para las provincias, a fin de que terminaran con el descontento público y los disturbios provinciales, por los que había versiones de renuncias de gobernadores de Tucumán, Salta, Santa Cruz, Río Negro, Formosa y La Pampa.

sólido bloque y normalicen la CGT.

A pesar de todas las prevenciones, la normalización de la CGT, en el Congreso de marzo, no contó ni con vandoristas ni participacionistas, sino que los sectores combativos lograron formar una CGT para enfrentar al gobierno militar, posteriormente conocida como “CGT de los Argentinos” (Dawyd, 2008). Semanas después, los sectores que no fueron o se retiraron del Congreso de marzo, realizaron otro del cual surgió la CGT Azopardo. Por unos meses la mayoría de los participacionistas estuvo formalmente en la que se conocía como “CGT Azopardo”, pero su compromiso con la misma, en la disputa con la CGTA, era escaso. Mientras ambas centrales se enfrentaron por la representación del peronismo, la tendencia participacionista mantuvo su posición de acercamiento al gobierno, tanto para la resolución de conflictos puntuales en sindicatos, como para la obtención de beneficios, a pesar de que el gobierno no los correspondía con la postergada convocatoria a paritaria ni con los magros aumentos salariales fijados por decreto.

Mientras hacia fines de 1968 y comienzos de 1969 el vandorismo concentraba esfuerzos en la reorganización de las 62 organizaciones (con aval de Perón), y los sectores combativos conformaron el Peronismo Revolucionario (PR), los participacionistas volvían a reunirse con el gobierno militar. En aquel contexto de división de la CGT y los nucleamientos sindicales (62 y PR), se desarrollaron las reuniones que ultimaron detalles de la conformación del propio nucleamiento sindical participacionista, inspirado en la nueva posición sindical basada según Coria en qué “a menos que se esté en una posición insurreccional, participacionismo no es más que el sinónimo moderno del sindicalismo” (*La Razón*, 1968a, p. 5). El sector más cercano al gobierno, que no adhería a ninguna de las otras expresiones del peronismo, ni a las CGT, tenía el favor de aquél para nuclear a los sindicatos afines y restar apoyos a los convocados para la unidad del peronismo sindical, que acusaba a San Sebastián de divisionista⁴⁰.

Así fue como el miércoles 29 de enero de 1969 se reunieron los participacionistas para preparar un encuentro con Onganía. Constituyeron la mesa del sector con quienes representaban al participacionismo desde el comienzo: Coria (construcción), Isaac Negrete (cuero), Avelino Romero (textiles), Ángel Peralta (vitivinícolas) y Jorge Spinelli (espectáculo público)⁴¹. Dos días después tuvieron su entrevista con Onganía y el nombre para el nuevo nucleamiento: Nueva Corriente de Opinión (NCO). Aquella fue la primera entrevista del presidente con un nucleamiento sindical, y la reanudación oficial del diálogo después del fracaso del plan de acción de 1967.

La reunión se acordó para entregarle el memorial con el detalle de las aspiraciones del sector y que incluían temas de política salarial, convenciones colectivas, Obras Sociales, unidad sindical, amnistía gremial para los que

⁴⁰ Sobre la acusación de las 62 Organizaciones de ser el “principal divisionista del movimiento obrero y de propiciar una CGT oficialista” San Sebastián declaró una vez más que “el gobierno de ninguna manera aspira ni desea tener una CGT a su servicio. Si desea una CGT en función del país, que esté a tono con el movimiento sindical argentino” (*La Razón*, 1969a, p. 8).

⁴¹ Participaron 35 sindicatos entre ellos los participacionistas más importantes electricistas, textiles, vestido, cuero, construcción, petroleros, prensa, camioneros, vitivinícolas, caucho, aceiteros y seguro (nómina completa en *La Razón*, 1969b, p. 6 y *DIL*, Informe 107, 1969, p. 23 y 24).

participaron del Plan de Lucha de 1964 y participación⁴². Estuvieron presentes los sindicatos que en diciembre de 1968 renunciaron a la CGT Azopardo (el sindicato de hielo de José Acosta, vestido de José Alonso, aceiteros de Estanislao Rosales y madereros de Alfredo Norese); Onganía los exhortó a tener fe en el país y expresó el deseo del gobierno de que en breve hubiera una CGT única y fuerte, “al servicio del país y no del gobierno, el cual no se propone interferir en el proceso de normalización de las actividades sindicales” (*La Razón*, 1969c, p. 4). Un día después se conocieron las palabras que Onganía dirigió a los trabajadores:

Hasta aquí el gobierno de la Revolución Argentina ha sentido la ausencia de un vínculo de comunicación estable y eficiente con el sector del trabajo. Ese vínculo que hace a la participación y a la creación, por parte del Gobierno, del equilibrio de los intereses de la Nación, del trabajo y de la empresa [...] La participación por la que estamos es técnica, de estudio de problemas [...] Ese vínculo de unión eficiente y estable no podrá existir si por los cauces naturales y propios los trabajadores no constituyen su Confederación General del Trabajo como una expresión auténtica de sus verdaderos intereses. Pero el que quiera organizar la CGT con el signo de ese pasado inmediato, pierde lastimosamente el tiempo [...] ¿Que ha pasado en los sectores dirigentes en estos dos años y medio? Sus actitudes han sido diversas, porque los caminos también han sido diversos. Algunos tomaron hasta el de la subversión en una forma muy particular, muy singular, después de haber fracasado su intento de parar el trabajo por medio de la huelga [...] El gobierno habla de participación y los dirigentes quieren participar; ¿qué es entonces lo que impide el proceso? Señores: es la falta de organización de los trabajadores. Algunos de ustedes ya están jugados. Por eso hablo de lealtad. Pero en su conjunto todavía no tienen la fuerza para jugarse contra el problema político y decir: señores, aquí se acabó (*La Nación*, 1969, tapa y p. 3).

La entrevista de NCO con Onganía suscitó comentarios de todos los sectores. Diferentes agrupaciones de sindicatos participacionistas criticaron a las conducciones de los mismos por asistir a la entrevista con Onganía. Las 62 emitieron un documento donde se mostraban escandalizados por la posibilidad de otro nucleamiento peronista (y cercano al gobierno), cuando ellos eran los únicos representantes sindicales del movimiento que conseguirían una CGT peronista, contra las aspiraciones de una CGT oficial que sólo podría fracasar⁴³. Durante aquellos meses de consolidación del participacionismo, estos llegaron a contar con el apoyo del gobierno y una creciente cantidad de sindicatos que se habían retirado de Azopardo para integrarse en NCO. La CGT Azopardo tenía el apoyo del peronismo oficial, pero funcionaba más a nivel de las 62 prontas a

⁴² Documento completo en *DIL*, Informe 108, 1969, p. 27-34. Participaron de la reunión Onganía, Krieger Vasena, San Sebastián, el Secretario de Turismo (Frischknecht) y el director nacional de Asociaciones Profesionales (Antonio José Capdevilla) y 44 de los dirigentes participacionistas más importantes (*La Razón*, 1969c, tapa y p. 4).

⁴³ Declaración completa de las 62 contra NCO en *DIL*, Informe 108, 1969, p. 35 y 36. Para esta fecha las 62 Organizaciones habían vuelto a unificarse, desde que en septiembre de 1968 Perón se reconcilió con Vandor, y lo habilitó para reunificar el nucleamiento, con vistas a lograr una unidad de los sectores peronistas divididos, y posteriormente lograr la unidad de la CGT. Esto implicaba la reunión entre los sectores de la CGT de los Argentinos, la CGT Azopardo y el participacionismo, y a pesar de los llamados de los segundos, ni los combativos ni los participacionistas acataron los llamados a la unidad de las 62 y la CGT.

normalizarse. La CGTA retenía el apoyo de las regionales más importantes del interior del país y del PR y del Bloque de Agrupaciones Gremiales y Organizaciones Políticas Peronistas (a los que se sumaban las declamaciones de sectores políticos desde de radicales hasta la izquierda, pasando por la mayoría del estudiantado movilizado y los curas del tercer mundo).

Este esquema sufriría una nueva conmoción, tal como todo el país, tras las jornadas del Cordobazo, el 29 y 30 de mayo de 1969⁴⁴. En aquellas los dirigentes nacionales del participacionismo vieron cómo, su autoridad central, cuestionada en varias provincias desde 1968, aumentó hasta lo impredecible (*DIL*, Informe 116, 1969, p. 46). Para conjurar esas rebeldías, en las expectativas de NCO (y la CGT Azopardo) se planteó fuertemente la unidad de la central como objetivo para 1969. Así lo entendieron muchos participacionistas que comenzaron a alejarse de NCO hacia posiciones “autónomas”, como paso previo a la futura inclusión en las 62, y su vuelta oficial al peronismo y la formación de una CGT enteramente reperonizada (*Periscopio*, n. 47, 1970, s/p). En aquel proceso jugó un especial rol otro acontecimiento tan conmocionante como el Cordobazo; un mes después de aquel, el 30 de junio de 1969, un grupo guerrillero comanda asesinó al dirigente Augusto Vandor, después del cual el gobierno implantó el estado de sitio y encarceló a la dirigencia nacional de la combativa CGT de los Argentinos, erróneamente acusada como partícipe del asesinato.

En aquellos meses en que negociaron su reintegración en la CGT (en la Comisión Normalizadora⁴⁵), también negociaron la ley de Obras Sociales (negociada entre fines de 1969 y comienzos de 1970, cuando fue sancionada), dada en parte con la ilusión de frenar la inercia combativa del Cordobazo. Así, el participacionismo, a la postre, pudo exhibir en su haber, ni más ni menos, la sanción de aquella crucial ley, que si bien añadió otro control estatal al sindicalismo (una nueva razón para enjuagar ánimos de protesta, que podrían hacer perder las Obras Sociales ante interventores), consagró la pertenencia sindical de las Obras que los sindicatos había desarrollado desde años atrás, y fueron favorecidas por nuevos fondos millonarios para su mantenimiento y creación donde no las hubiera.

Las acciones de mayo, que violentamente desafiaron en el interior del país el orden social que proclamaba el gobierno y desnudaron el autoritarismo militar (que debió imponerse violentamente para sostener un orden social que

⁴⁴ El “Cordobazo” es el nombre con el que se conoció a la pueblada que durante la jornada huelguística que en la provincia de Córdoba antecedió al paro del 30 de mayo de 1969 (huelga conjunta de ambas CGT), terminó con disturbios entre trabajadores y estudiantes contra las fuerzas policiales, que no pudieron evitar que aquellos se hicieran con el control de la ciudad, durante el día 29. Fue un punto de inflexión importante en tanto desafió al autoritarismo militar, minó las bases sociales de su orden, y fue la expresión final de una serie de puebladas que durante todo el primer semestre de 1969 arremetieron contra el gobierno, especialmente recordadas, además de la de Córdoba, la de Rosario, Corrientes, y otras ciudades del interior de la Argentina.

⁴⁵ La Comisión Nacional Reorganizadora y Normalizadora de la CGT se formó en noviembre de 1969, después de la designación de un delegado del gobierno militar en el CGT Azopardo, tras el asesinato de Vandor. Aquella presencia oficial en la CGT allanó el camino para la vuelta del participacionismo a la central sindical, y NCO tuvo la mitad de los directivos de aquella Comisión Normalizadora, también integrada por las 62 y NA. Los integrantes de la Comisión por parte de las 62, al no haber sido autorizados por Perón para integrar la misma, fueron expulsados de las 62, y pasaron a formar el grupo de “Los 8”.

se proclamaba como consenso) reposicionaron a los combativos y la CGTA; aunque fueron las últimas de aquella central, la misma, como gesto póstumo, podía reclamar en ellas su pírrico triunfo. De manera similar, en la ley de Obras Sociales, los participacionistas pudieron identificar su gran logro, tras cuatro años de acercamiento al gobierno militar. Si el Cordobazo comenzó a sellar el fin de la dictadura, esta buscó en la ley de Obras Sociales (entre otras medidas) un dique de contención al sindicalismo combativo. El dique estaba, paradójicamente, en el fin de la propia dictadura, que había alentado la experiencia participacionista y como contrapartida no deseada, también la experiencia combativa; con el comienzo de la salida política, comenzaron a declinar las dos tendencias sindicales que habían visto su apogeo durante el onganato.

El caso del sector electricidad y la participación del dirigente Juan José Taccone

El caso de Juan José Taccone es sumamente ilustrativo; fue el más publicitado sobre la base de que aquél dirigente asumió públicamente la representación del participacionismo en conferencias, mesas redondas y demás espacios públicos. La adscripción a la participación le permitió a Taccone la posibilidad de revisar la anunciada racionalización en las empresas estatales de energía eléctrica, a lo cual sumó posteriormente el favorecimiento de San Sebastián para la injerencia de su sindicato, Luz y Fuerza, en la racionalización del sector, dado que ese sindicato era “decano entre los gremios participacionistas” (*Primera Plana*, N.264, 1968, p. 16). De aquella manera marcó el camino para la participación de sindicatos estatales, como estrategia para conseguir beneficios en las reformas (racionalizaciones) de los sistemas de trabajo en un contexto de ausencia de beneficios salariales. Sin embargo, a pesar de la participación, después de ocho meses de negociaciones (entre octubre de 1967 y mayo de 1968) no hubo acuerdo entre el sindicato y los directivos de las empresas de energía, y en el contexto de la división de la CGT en 1968, cierto sector militar nacionalista presionó a favor de la resolución beneficiosa para los electricistas, a fin de ganar a los sindicatos a la posición participacionista, a través de un laudo que mostrara las ventajas de acercarse al gobierno militar. Ello era necesario porque “Si el gobierno contraría los intereses obreros, peligra la adhesión general al Congreso vandorista: es que nadie se sumará a un sector cuyos jefes cortejan a un Gobierno que no entrega réditos” (*Primera Plana*, N.279, 1968, p. 12).

Ante la importancia ejemplificadora de la resolución del caso lucifuercista, San Sebastián amenazó con renunciar y se especuló que la postergación del Congreso de Azopardo (realizado finalmente a fines de mayo de 1968) se realizó a la espera de un laudo favorable para la racionalización del sector electricidad. Lo crucial de la racionalización en aquél sindicato era que el informe técnico sugirió eliminar la Bolsa de Trabajo (que Coria, del sindicato de la construcción, otro representante participacionista, ya lo había aceptado), la promoción del personal y las comisiones de convenio. El 6 de mayo finalmente se conoció el laudo que concedió a la parte empresaria la posibilidad de fijar la estructuración de los planteles, la movilidad de los trabajadores y el manejo de la selección y los horarios del personal. Un claro triunfo de la parte empresaria (saludado por la Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres) que

sólo otorgó al sindicato la posibilidad de revisar aquellas decisiones, es decir, reclamar las disposiciones de la parte empresaria sobre el control en el lugar de trabajo, como única forma de participación; en caso de que entre ambos no lograran acordar, resolvería la Secretaría de Trabajo. Mariano Grondona (periodista afín al gobierno, desde que antes del golpe militar ya era ideólogo del sector del ejército encabezado por Onganía) consideró que, a pesar de que preservaba el poder económico del sindicato, el laudo "inicia un proceso fundamental: la recuperación, por parte de las empresas, del control laboral, hasta ahora compartido con el sindicato" (*Primera Plana*, n. 281, 1968, p. 11 y 17). Desde aquél declararon estado de movilización, pero no pasó a mayores.

Conclusiones

Desde el golpe de Estado de 1966 y la racionalización económica decretada por el gobierno militar en 1967, comenzó una búsqueda de definiciones en el movimiento obrero. Para algunos, éste, debido a las nuevas políticas económicas, debía oponerse; estos eran los "duros", quienes sostenían aquella posición a favor de medidas de nacionalismo económico desde antes del ongiato. Para otros, siguiendo también su accionar previo, había que dialogar con los sectores del gobierno que se mostraran menos hostiles a las actividades económicas y las organizaciones sindicales. Para un nuevo sector, a pesar de las mismas políticas, había que participar con el gobierno para no perder personerías (y con ello los ingresos sindicales) y tratar de cambiar al gobierno por dentro. Estos últimos fueron una novedad que no existió antes, dada también por la inexistencia previa de gobiernos militares como el de 1966 que llamó a la participación a sectores de la sociedad, ya desinteresados en la consolidación de una democracia que consideraban irreductiblemente inestable.

Los vandoristas más flexibles que Vandor, vieron la novedad del ongiato (escalonamiento e intervenciones por la negativa, participación en organismos del Estado por la positiva) y actuaron en consecuencia: se acercaron al gobierno. También los duros vieron esa novedad, pero decidieron resistirlo. Ni una actitud ni otra eran ajenas a la historia que el peronismo había desarrollado desde 1945, a sus experiencias, a sus textos. En ambas había una mirada al peronismo histórico y en los participacionistas una esperanza de una nueva alianza Pueblo-Fuerzas Armadas. El vandorismo, en cambio, no supo cómo adaptarse al nuevo gobierno dictatorial: se ubicó la mayor cantidad del tiempo junto a los participacionistas (en busca de ser parte del gobierno), pero en cuanto había un paro importante dispuesto por los duros, se plegaba al mismo (incluso mostrándose cómo más duro y también haciendo críticas al equipo económico liberal).

A través del relevamiento y el análisis de las disputas entre los tres sectores principales del sindicalismo, pudimos arribar a la discusión general en torno a la participación en el Estado y con gobiernos autoritarios. Tal como vimos, el participacionismo comenzó a privilegiar el acercamiento al Estado con el que pretendían construir los vínculos corporativos sostenidos desde antes (reclamos por la cogestión en las empresas, la integración de comisiones estatales con capacidad ejecutoria y la participación en la elaboración de políticas públicas). Si lo hizo fue porque encontró en el nuevo autoritarismo burocrático un nuevo gobierno que buscó en los sindicatos un interlocutor

válido, tanto por concebirlos como una entidad natural de la sociedad, como porque a través del control de los mismos podría llevar a cabo las transformaciones económicas buscadas sin oposición social.

Sin embargo, debemos destacar dos elementos generales de la relación entre el nuevo autoritarismo y la tendencia sindical participacionista. En primer lugar, no cabe ver al participacionismo como un bloque homogéneo, tanto porque algunos de sus primeros líderes se distanciaron tras experimentar las veleidades de la participación (como Taccone tras la perjudicial racionalización en el sector eléctrico) como cuando después de las conmociones de mayo y junio de 1969 (desde las puebladas y manifestaciones hasta el comienzo de la violencia política) crecieron los cuestionamientos internos en aquella tendencia sindical.

El caso de Juan José Taccone, uno de los primeros dirigentes sindicales de relevancia que favoreció la moderación contra el gobierno militar, adscribió públicamente al participacionismo y se acercó al gobierno a través de su relación con funcionarios de diversa jerarquía, fue vocero de dicha tendencia (y del corporativismo) y perjudicado en la praxis participacionista en Luz y Fuerza, es sumamente representativo del auge y caída del participacionismo. Así como él mismo fue uno de los primeros en acercarse al gobierno, también lo fue en alejarse tras la racionalización en el sector eléctrico, y pasar a integrar poco después los sectores duros de las 62 Organizaciones, que participaron de la CGT bajo el secretariado general de José Ignacio Rucci, desde 1970.

Respecto de la normalización de la CGT, realizada en 1970, podemos decir que la experiencia que comenzó con Rucci al frente de la central obrera, poco podía reclamarse seguidora de la dirigencia que la precedió dos años atrás. La CGT Azopardo en 1968 actuó sin participacionistas, ni duros, y el proceso que se abrió en 1970 estaba emparentado con una apertura política diametralmente diferente del contexto del onganiano en que ambas CGT habían competido. Tan diferente lo fue que con la vuelta de la democracia y el peronismo al gobierno en 1973, la posibilidad de “participar” retomó los significados que había tenido casi treinta años atrás, y Juan José Taccone pudo ahora sí enseñar los beneficios de la participación desde su nuevo cargo de presidente de los Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), en una de las experiencias más notorias de cogestión.

De esta manera podemos retomar, en primer lugar, nuestra posición respecto de la novedad del participacionismo, durante el nuevo autoritarismo del onganiano, irreductible a las experiencias previas de participación, sólo comparable con situaciones similares en contextos burocráticos autoritarios, donde aquella tendencia buscó su transformación en “factor de poder”, y el gobierno militar buscó ampliar su base de legitimidad a partir de la apertura de espacios a actores sociales corporativos.

En segundo lugar, debemos señalar el fracaso de aquél intento corporativo del nuevo autoritarismo y los sectores participacionistas. Señalar que aquella experiencia del participacionismo entre 1966 y 1970 fracasó en su aspiración de lograr la CGT unida con la que transformarse en “factores de poder”, y fracasó en hegemonizar al movimiento obrero para evitar todo tipo de desbordes sociales, que fueron a la postre los que coadyuvaron también a la caída de la experiencia de Onganía.

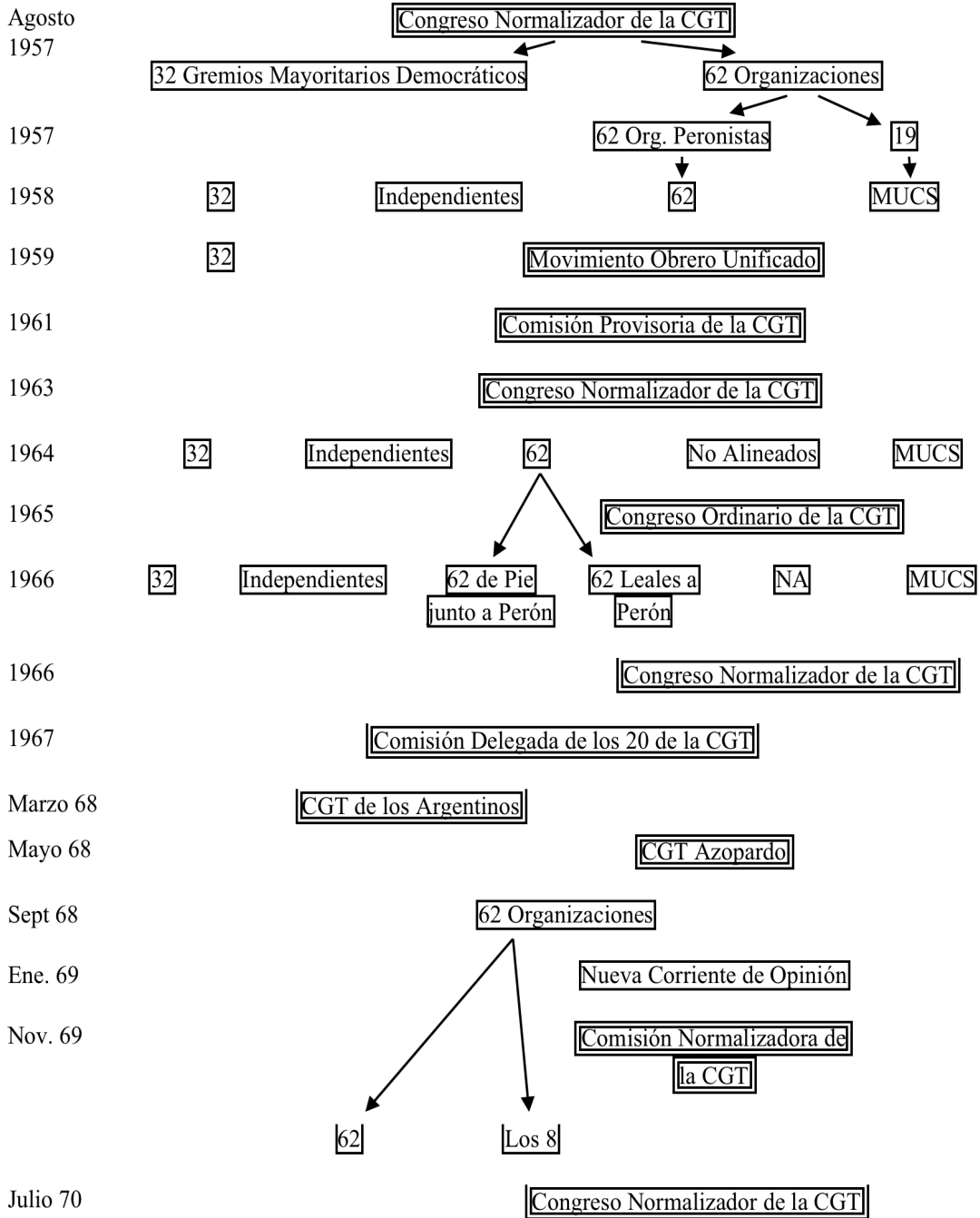
Precisamente tras la remoción de Onganía se fue avizorando lentamente una cierta salida política, en cuya posibilidad se dejaba atrás al discurso

represivo y racionalizador del onganiano en cuyo marco se había desarrollado el participacionismo. Ya ante una vuelta de las semidemocracias del juego imposible (1955-1966) y más ante una verdadera salida política, la tendencia que renacía con fuerza era el dialoguismo, núcleo mayoritario del sindicalismo. Ello mostraba que, si por un lado, desde el golpe de 1966 para los combativos “el caso para la lucha armada se volvió mucho más persuasivo” (Gillespie, 1989, p. 68), por otro lado, el participacionismo se relacionaba con la falta de canales democráticos de expresión de las demandas, que consolidaban maneras “extra institucionales” de hacer política (Cavarozzi, 2002, p. 12) y con ellas a los “factores de poder”.

Así, podríamos añadir como tercer elemento de la experiencia autoritaria-participacionista, que en el nuevo horizonte de una salida política, y el resurgimiento de la CGT peronista unida, quedaron al margen las dos experiencias crecidas en el marco político del autoritarismo, las participacionistas y combativas. Si los segundos continuaron un proceso de búsqueda política que habían iniciado poco atrás (en torno al trabajo en las bases sindicales), los participacionistas comenzaron a reintegrarse al dialoguismo sin dificultades; como sus compromisos fueron mayormente con Onganía y sus funcionarios, una vez ido estos muchos manifestaron sentirse con menores ataduras para dejar la cercanía que habían cultivado junto aquel sector del ejército.

Ante la remoción de Onganía el 8 de junio de 1970 no organizaron ninguna jornada como la que casi 25 años atrás había impedido el alejamiento de un sector del gobierno en pos de otro, y logrado la liberación de su líder. La rápida frustración del proyecto del 66 (por las movilizaciones encabezadas por el heterogéneo arco opositor) realineó a los actores políticos en las grandes identidades previas. Estas volvieron a colocarse a la espera de una nueva salida política y su recomposición imposibilitó la formación de la nueva identidad que los militares pretendieron superadora de las antiguas divisiones.

16/11/55 Intervención militar en la CGT



Cuadro general. La CGT y los nucleamientos sindicales

Bibliografía

- ABRAHAM, Tomás. *Historias de la Argentina deseada*. Buenos Aires, Sudamericana, 1995.
- ALTAMIRANO, Carlos. *Bajo el signo de las masas (1943-1973)*. Buenos Aires, Ariel, 2001.
- BRENNAN, James. *El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba (1955-1976)*. Buenos Aires, Sudamericana, 1996
- CAVAROZZI, Marcelo. *Sindicatos y política en Argentina*. Buenos Aires, Cedes, 1984.
- CAVAROZZI, Marcelo. *Autoritarismo y democracia*. Buenos Aires, Eudeba, 2002.
- COLLIER, David (comp.). *El nuevo autoritarismo en América Latina*. México, FCE, 1985.
- CORDONE, Héctor. "El sindicalismo bajo la hegemonía peronista: emergencia, consolidación y evolución histórica (1943-1973)", en MORENO, Omar, *Desafíos para el sindicalismo en la Argentina*. Buenos Aires, Legasa, 1993.
- DAWYD, Darío. "A 40 años del Programa del 1º de mayo. La CGT de los argentinos y la ofensiva contra la 'Revolución Argentina'", *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*. Paris, CERMA - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2008. <http://nuevomundo.revues.org/38022>
- DAWYD, Darío, "Relación de la unidad del movimiento obrero argentino, desde fines del siglo XIX a la actualidad", *Revista Cultural Lotería*, Ciudad de Panamá, publicación de la Dirección de Desarrollo Social y Cultural, n. 495 mar.-abr. 2011.
- FERNÁNDEZ, Arturo, *Ideologías de los grupos dirigentes sindicales/1 (1966-1973)*. Buenos Aires, CEAL, 1986
- GILLESPIE, Richard. *J. W. Cooke. El peronismo alternativo*. Buenos Aires, Cántaro, 1989.
- HALPERIN DONGHI, Tulio. *Historia contemporánea de América Latina*. México, Alianza, 1983.
- HALPERIN DONGHI, Tulio. *La larga agonía de la Argentina peronista*. Buenos Aires, Ariel, 2006.
- HOBBSAWM, Eric J. *Historia del siglo XX*. Buenos Aires, Crítica, 2001.
- JAMES, Daniel. *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina (1946-1976)*. Buenos Aires, Sudamericana, 1999.
- LOBATO, Mirta Zaida, "Las experiencias sindicales en tiempos de Onganía: diálogo y confrontación", en *Revista Todo es Historia*, n. 230, julio de 1986.
- MCGUIRE, James W., "Perón y los sindicatos: la lucha por el liderazgo peronista", en AMARAL, Samuel y BEN PLOTKIN, Mariano (comps.), *Perón: Del exilio al poder*, Buenos Aires, EDUNTREF, 2004.

- MURMIS, Miguel y PORTANTIERO, Juan Carlos. *Estudios sobre los orígenes del peronismo*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2006.
- NINA, Andrés, "La doctrina de seguridad nacional y la integración latinoamericana", en revista *Nueva Sociedad*, n. 27, noviembre-diciembre de 1979.
- O'DONNELL, Guillermo A. 1966-1973. *El estado burocrático autoritario. Triunfos, derrotas y crisis*. Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982.
- O'DONNELL, Guillermo A. *El "corporativismo" y la cuestión del estado*. Buenos Aires, Documento CEDES GE/ CLACSO n. 2, 1975.
- O'DONNELL, Guillermo. *Modernización y Autoritarismo*. Buenos Aires, Paidós, 1972.
- ROTONDARO, Rubén. *Realidad y cambio en el sindicalismo*. Buenos Aires, Pleamar, 1971.
- ROUQUIÉ, Alain y SUFFERN, Stephen. "Los militares en la política latinoamericana desde 1930", en BETHELL, Leslie (ed.), *Historia de América Latina*. 12. *Política y Sociedad desde 1930*, Barcelona, Crítica, 1997.
- ROUQUIÉ, Alain. *Poder militar y sociedad política en la Argentina. 1943-1973*. Buenos Aires, Emecé, 1983.
- SELSER, Gregorio. *El Onganiato*. Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.
- TCACH, César. "Golpes, proscripciones y partidos políticos" en JAMES, Daniel (dir.) *Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*. Buenos Aires, Sudamericana, 2003.
- VALENZUELA, Samuel J. "Movimientos obreros y sistemas políticos. Un análisis conceptual y tipológico", en *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales*, Buenos Aires, v. 23, n. 91, octubre-diciembre de 1983.

Fuentes periódicas

- Clarín*, Buenos Aires, 30 de junio de 1966a.
- Clarín*, Buenos Aires, 1 de julio de 1966b.
- Clarín*, Buenos Aires, 9 de diciembre de 1966c.
- Clarín*, Buenos Aires, 29 de mayo de 1967.
- Confirmado*, Buenos Aires, n. 85, 2 de febrero de 1967.
- DIL*, Buenos Aires, Informe 107, enero de 1969.
- DIL*, Buenos Aires, Informe 108, febrero de 1969.
- DIL*, Buenos Aires, Informe 116, octubre de 1969.
- La Nación*, Buenos Aires, sábado 1° de febrero de 1969.
- La Razón*, Buenos Aires, sábado 14 de septiembre de 1968a.
- La Razón*, Buenos Aires, martes 4 de marzo de 1969a.
- La Razón*, Buenos Aires, jueves 30 de enero de 1969b.
- La Razón*, Buenos Aires, viernes 31 de enero de 1969c.
- Periscopio*, Buenos Aires, n. 47, 11 de agosto de 1970.
- Primera Plana*, Buenos Aires, n. 184, 5 de julio de 1966.
- Primera Plana*, Buenos Aires, n. 189, 9 de agosto de 1966.

- Primera Plana*, Buenos Aires, n. 195, 20 de septiembre de 1966.
Primera Plana, Buenos Aires, n. 196, 27 de septiembre de 1966.
Primera Plana, Buenos Aires, n. 200, 25 de octubre de 1966.
Primera Plana, Buenos Aires, n. 201, 1º de noviembre de 1966.
Primera Plana, Buenos Aires, n. 205, 29 de noviembre de 1966.
Primera Plana, Buenos Aires, n. 207, 13 de diciembre de 1966.
Primera Plana, Buenos Aires, n. 208, 20 de diciembre de 1966.
Primera Plana, Buenos Aires, n. 209, 27 de diciembre de 1966.
Primera Plana, Buenos Aires, n. 213, 24 de enero de 1967.
Primera Plana, Buenos Aires, n. 218, 28 de febrero de 1967.
Primera Plana, Buenos Aires, n. 219, 7 de marzo de 1967.
Primera Plana, Buenos Aires, n. 220, 14 de marzo de 1967.
Primera Plana, Buenos Aires, n. 221, 21 de marzo de 1967.
Primera Plana, Buenos Aires, n. 230, 23 de mayo de 1967.
Primera Plana, Buenos Aires, n. 231, 30 de mayo de 1967.
Primera Plana, Buenos Aires, n. 248, 26 de septiembre de 1967.
Primera Plana, Buenos Aires, n. 253, 31 de octubre de 1967.
Primera Plana, Buenos Aires, n. 256, 21 de noviembre de 1967.
Primera Plana, Buenos Aires, n. 257, 28 de noviembre de 1967.
Primera Plana, Buenos Aires, n. 259, 12 de diciembre de 1967.
Primera Plana, Buenos Aires, n. 261, 26 de diciembre de 1967.
Primera Plana, Buenos Aires, n. 264, 16 de enero de 1968.
Primera Plana, Buenos Aires, n. 279, 30 de abril de 1968.
Primera Plana, Buenos Aires, n. 281, 14 de mayo de 1968.

Darío Dawyd licenciado en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires – Argentina), Magister en Historia del Mundo Hispánico (Consejo Superior de Investigaciones Científicas – España), Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Becario Postdoctoral en el CEIL-CONICET. Profesor adjunto de “Historia Política de América” en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM).

Contacto: dawydario@hotmail.com

Recibido: 23/08/2012
Aceptado: 10/12/2012